



**OSAL**

**Observatorio Social de América Latina**  
**Publicación electrónica**

## **Cronología del Conflicto Social**

**R**

A

Consejo Latinoamericano  
de Ciencias Sociales



**CLACSO**

Conselho Latino-americano  
de Ciências Sociais

# Documento de trabajo N° 228

*Realizado por  
el Comité de Seguimiento  
del Conflicto Social y la Coyuntura  
Latinoamericana de R*



Integrantes                      Juan

Diarios                              E

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina (OSAL)** constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos **Comités de Seguimiento del Conflicto Social** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

### Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS	INSTITUCION	RESPONSABLES
Guatemala	FLACSO	Simona Yagenova Mario Castañeda
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Diana Cárdenas
Paraguay	Centro de Documentación de Estudios	Quintín Riquelme
Ecuador	CIUDAD	Mario Unda Hugo González
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Chile	ARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo
Brasil	LPP	Roberto Leher
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
México	UNAM	Massimo Modonesi Lucio Oliver
Panamá, El Salvador, Nicaragua Honduras y Costa Rica	CELA (Panamá)	Marco A. Gandásegui, h.
República Dominicana y Puerto Rico	Centro Juan Montalvo (Rep. Dominicana)	Mario Serrano Juan Luis Corporán
Venezuela	PROVEA	Marino Alvarado Marco Antonio Ponce
Costa Rica	IIS	Sindy Mora Solano

**Costa Rica**  
**Cronología del conflicto social**  
**Agosto de 2009**

**Sábado 1**

Habitantes de la reserva indígena de Quitirrisí, en el cantón de Mora, interponen un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, debido a las actividades que se realizan en dichas comunidades indígenas, y que causan daños ambientales en mantos acuíferos y bosques primarios. La acción es interpuesta contra la Municipalidad de Mora y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), por la siembra de café en zonas indígenas, sembradíos que precisan de fuertes agroquímicos. Ante esta denuncia, la Sala Constitucional determina que la Municipalidad de Mora, la Asociación de Desarrollo Integral de Quitirrisí y la CONAI son las responsables de coordinar e implementar las medidas que eviten la contaminación del medio ambiente en dichas zonas.

La Unión de Productores Agropecuarios Independientes (UPIAV), junto a otros sectores del cantón de Pérez Zeledón en la provincia de San José, realizan una marcha en protesta por los atrasos que sufren las y los asegurados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en el suministro de los medicamentos. De acuerdo con éstos, las tardanzas van desde los 8 hasta los 22 días.

La Defensoría de los Habitantes solicita al Consejo de Transporte Público (CTP), entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), revisar la calidad del servicio que la empresa Autotransportes San Antonio S.A. presta en las rutas de buses a Barrio San José, Colima, Fátima, Linda Vista y Guatuso, entre otros, en el cantón de Desamparados. Según la Defensoría, son cuantiosas las denuncias por el estado de las unidades y el servicio que presta la empresa. Además, la Defensoría reclama que no se han respondido varias solicitudes de información.

**Lunes 3**

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) envía una carta al Presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, en la que repudia la cadena televisiva emitida el día 2, en la que lanzó duras críticas a la dirigencia del Sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP). Ante la urgencia gubernamental de que los puertos sean concesionados a empresas privadas, la Administración Arias Sánchez ofreció meses atrás un total de 2,7 millones de colones por cada año trabajado hasta un tope de 20 años, lo que significa alrededor de 5 mil dólares por año trabajado para cada trabajador. No obstante, los trabajadores de SINTRAJAP se han opuesto a esta medida y han mantenido su oposición a la iniciativa gubernamental. Adicionalmente, la relación entre el gobierno y el sindicato se ha enardecido, dado que SINTRAJAP se ha opuesto a la iniciativa de un grupo de trabajadores, quienes han recogido firmas para la realización de una asamblea general a fin de que se les consulte sobre las posibilidades de negociar con el gobierno. SINTRAJAP rechazó esta petición, debido a los vínculos cercanos que este grupo mantiene con el gobierno. La carta de la CGT critica el discurso gubernamental, en el

sentido de que no todos los trabajadores se muestran anuentes a aceptar dinero como medida para facilitar o dar curso a las iniciativas gubernamentales.

El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) envía una carta al Presidente de la República, en la que repudia la participación del ex diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Mario Redondo Poveda, en una consultoría cuya finalidad es asesorar a la Presidencia de la República en la implementación y seguimiento del Plan Escudo. De acuerdo a la denuncia, el gobierno otorgó ¢8.100.000.00, por un total de 180 horas laboradas. El SEC critica la posición gubernamental de utilizar fuertes sumas de dinero en consultorías, que podrían ser utilizadas para atender la crisis y las necesidades de muchas familias costarricenses.

Integrantes de 90 familiares de artesanos que trabajan en la Calle de la Artesanía y la Cultura se mantienen frente a Casa Presidencial, luego de que Arias Sánchez hiciera públicas sus intenciones de vetar la Ley 16.377, que les permite trabajar en las cercanías de la plaza de la Democracia, en el centro de San José. De acuerdo a los artesanos, el interés de Arias es favorecer la iniciativa de la Fundación Arias para la Paz, fundada en 1988 por él mismo, a fin de construir un Museo para la Paz.

Los distintos cuerpos policiales del país, entre los que destacan la Policía Penitenciaria, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública, realizan una declaración pública en la que anuncian que mantendrán una reunión con autoridades de gobierno para continuar con las negociaciones que den solución a sus exigencias en materia salarial y laboral. Los representantes de los cuerpos policiales exigen que se realice una revaloración salarial, además de que se solucionen otros problemas laborales tales como la alimentación, el hacinamiento en que se trabaja en las cárceles del país y la jornada laboral.

Las y los trabajadores del Plantel de Colima, en el cantón de Tibás de la provincia de San José, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), realizan un paro de labores para protestar por la eliminación de 260 espacios de parqueo dentro de las instalaciones del Plantel. De acuerdo con las y los trabajadores, esto ha generado que muchos de ellos tengan que estacionar sus automóviles en las afueras del plantel, lo que ha provocado un constante caos vial debido a lo angosto de las vías.

Las y los estudiantes, ex alumnos y madres y padres de familia del Colegio Clodomiro Picado del cantón de Turrialba en la provincia de Cartago realizan una protesta frente a las instalaciones de la institución, para exigirle al Ministerio de Educación Pública (MEP), la destitución de la Directora debido al mal manejo económico y educativo que hace de la institución.

#### **Martes 4**

Grupos de mujeres y trabajadoras del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) protestan frente a la Asamblea Legislativa, a fin de oponerse a la pretensión de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ofelia Taitelbaum, de reducir el presupuesto del INAMU mediante un proyecto de ley. La propuesta de Taitelbaum es reducir los ingresos provenientes del Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF),

de un 2% a un 1%. Ofelia Taitelbaum aspira actualmente a convertirse en la Defensora de los Habitantes, habiéndose ganado el repudio de distintos sectores sociales.

### **Miércoles 5**

Un grupo de 80 artesanos que trabajan en la Calle 13, ubicada en la provincia de San José, permanecen concentrados frente a la Casa Presidencial en el cantón de Zapote de la provincia de San José, como medida de presión para exigirle al Presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, que no vete la ley 16.377, aprobada por la Asamblea Legislativa, y que le permite a las y los artesanos seguir trabajando en esta calle. De acuerdo con las y los manifestantes, el interés del gobierno es trasladarlos al Edificio El Frontón ubicado en San José; sin embargo, éstos manifiestan su oposición a las intenciones del gobierno, entre otras cosas, por el pésimo estado en que se encuentran las instalaciones del edificio.

### **Jueves 6**

Los representantes del autodenominado “grupo mediador” a favor de la concesión de los puertos Moín y Limón interponen un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional, para denunciar la decisión del SINTRAJAP, de no atender la solicitud del grupo, de llevar a cabo una asamblea general, en la que se discuta una solución al tema de la concesión de los muelles y la indemnización a las y los trabajadores. El “grupo mediador” es un grupo de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que se encuentra a favor de la concesión y que ha trabajado porque SINTRAJAP acepte la propuesta gubernamental de la concesión de puertos. Es por ello que solicitan la convocatoria a dicha asamblea general. Por su parte, SINTRAJAP señala que el “grupo mediador” es un grupo al servicio de la Administración Arias Sánchez, formado por trabajadores de JAPDEVA, bajo la iniciativa y la tutela del gobierno para presionar a SINTRAJAP a la apertura.

Los distintos cuerpos policiales del país realizan una declaración pública en la que anuncian la realización de una concentración frente al Ministerio de Hacienda, ubicado en San José, como parte de las medidas para seguir presionando al gobierno para que realice un aumento salarial a los distintos cuerpos, así como para que solucione otros problemas laborales que aquejan a estas dependencias.

### **Lunes 10**

Un grupo de policías pertenecientes a distintas entidades tales como la Policía Penitenciaria, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública, realizan una concentración frente al Edificio del Ministerio de Hacienda en la provincia de San José, para demandar un aumento salarial. Además, incluyen entre sus exigencias la solución de una serie de problemas laborales que les han venido afectando tales como la alimentación, el hacinamiento en que se trabaja en las cárceles y las jornadas laborales.

Vecinos de Pozos de Santa Ana realizan un bloqueo para protestar por la concesión de la carretera San José – Caldera, concesión que ha tenido como principal consecuencia el aumento del pago del peaje por parte de los vecinos. La protesta se dirige al MOPT, razón por la que exigen la renuncia de Karla González, jefa de la entidad. La acción finaliza con la intervención de cuerpos policiales, quienes detienen a 36 personas, la mayor parte de ellas jóvenes, incluidas 3 menores de edad.

### **Martes 11**

Producto de las protestas protagonizadas por los vecinos de Pozos de Santa Ana, del lunes 10 de agosto, los mismos organizan un conversatorio con representantes de los partidos Movimiento Libertario (ML) y Partido Acción Ciudadana (PAC), que se celebra en la Asamblea Legislativa. Por parte del PAC participa el diputado Marvin Rojas, y por parte del ML participa el diputado Mario Quirós. Los vecinos exponen su malestar ante ambos diputados, quienes señalan las dificultades de controlar las acciones realizadas por las empresas concesionarias, dado que el Estado no fiscaliza eficientemente los servicios brindados por las mismas, ni cumple con las sanciones establecidas por ley, en caso de que las empresas no cumplan con sus responsabilidades.

### **Miércoles 12**

Las y los trabajadores de la Municipalidad de San José (MSJ) le envían una carta al Alcalde Municipal, Johnny Araya, en la que amenazan con irse a huelga de no ser atendida su solicitud de trasladar de unidad al Jefe de Servicios Ambientales de la MSJ. De acuerdo con el Alcalde Municipal, la petición fue atendida por la MSJ; sin embargo, después de estudiar el caso se llegó a la conclusión de que no había suficientes motivos para hacer efectivo el traslado solicitado por el sindicato.

### **Viernes 14**

Las y los mineros artesanales del cantón de Abangares en la provincia de Guanacaste realizan una protesta frente al Edificio del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), para exigirle que se legalice la minería artesanal dentro del nuevo código minero. De acuerdo con las y los mineros artesanales, la reforma propuesta por el MINAET elimina a los mineros artesanales, lo cual sería de un profundo impacto para el cantón de Abangares, dado que de este tipo de actividad dependen alrededor de 3 mil personas.

Mediante una carta, el pasado 19 de junio, el obispo Victorino Girardi denunció los niveles de pobreza y exclusión social vividos en la provincia de Guanacaste. Guanacaste es una de las provincias de Costa Rica en las que en los últimos años se ha vivido un intenso desarrollo inmobiliario y turístico. Ante las denuncias presentadas por Girardi en esta carta, representantes del Ministerio de Planificación y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) cuestionaron y desmintieron los datos brindados por el obispo, mediante un comunicado fechado el 6 de agosto. Estos hechos llevan a 34 sacerdotes de

la Diócesis de Tilarán-Liberia a cuestionar el comunicado oficial, señalando la pobreza que vive la provincia guanacasteca. Los 34 sacerdotes firmantes señalan los problemas de pobreza, bajos salarios, desempleo y discriminación hacia la población nicaragüense presente en la región. De la misma forma, denuncian el reducido acceso a servicios de salud de calidad, el acceso a la educación superior, a agua potable y electricidad, que sufre la población en general.

#### **Jueves 20**

Las distintas agrupaciones indígenas del país solicitan a los diputados de las fracciones legislativas, mediante una conferencia de prensa, que cumplan con la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena. Esta ley tiene alrededor de 15 años de encontrarse en la Asamblea Legislativa. Los dirigentes indígenas señalan que todas las fracciones parlamentarias con fuerte presencia en la Asamblea han engañado a los indígenas, en especial las fracciones del PLN, el PUSC, el PAC y el Movimiento Libertario. Desde su perspectiva, todas estas agrupaciones políticas han manifestado su apoyo al proyecto, pero sin embargo, ninguna se compromete a su aprobación.

#### **Lunes 24**

Las y los vecinos de Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia bloquean la vía para pedir la destitución del director de la Escuela Rubén Darío. Unos 200 manifestantes se colocan en el paso de la línea férrea e impiden que continúe brindándose el servicio de ferrocarril; también evitan que salgan de las estaciones otros 9 trenes, según informa el presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). Plagas de insectos, pésimas condiciones sanitarias y otros tantos problemas reclaman madres y padres de estudiantes que asisten a la Escuela Rubén Darío.

Organizaciones de mujeres y diputadas presentan ante la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres. Esta solicitud se da tras la anulación por parte de la Sala IV de los artículos 22 y 25 de la misma, los cuales eran los artículos más utilizados por las mujeres que interponían sus denuncias al respecto. La propuesta es apoyada por diputadas de las distintas fracciones parlamentarias.

#### **Miércoles 26**

Los sindicatos de las cuatro universidades estatales, a saber, el Sindicato de Empleados y Empleadas de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC) y la UNE-UNED realizan una declaración pública en la que anuncian su rechazo a la propuesta del gobierno de aumentar el presupuesto para la educación pública en ¢31 mil millones de colones para el próximo año. De acuerdo con los representantes del SINDEU, esta cantidad de dinero es insuficiente para cubrir las necesidades actuales de la educación pública; además,



critican la propuesta del gobierno de recurrir al endeudamiento para poder financiar la educación pública.

La Sala IV rechaza un recurso de amparo presentado por trabajadoras y trabajadores de JAPDEVA contra el sindicato de esa institución por negarse a convocar a una asamblea para discutir el plan de concesión de los puertos de Limón. Las y los funcionarios alegan que el sindicato interno violó la convención colectiva al impedirles realizar una votación secreta sobre el proyecto de concesión. El Grupo Mediador recolectó 700 firmas de trabajadoras y trabajadores de JAPDEVA, para convocar a una asamblea para discutir el tema.

### **Jueves 27**

La Unión Costarricense de Cámaras, Asociaciones y Empresas Privadas (UCCAEP) solicita al gobierno una prórroga, a fin de que se postergue la entrada en vigencia de la Ley de Tránsito. De acuerdo a la UCCAEP, dicha prórroga le permitirá a los costarricenses adecuarse a las exigencias y requerimientos necesarios para atender la nueva legislación.

La organización Terra Nostra solicita a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de ley de gestión integral de residuos. Los representantes de dicha organización reclaman a los diputados la no convocatoria del proyecto a sesiones extraordinarias, manifestando su preocupación por la ausencia de políticas relacionadas con el manejo de desechos y residuos en el país.

### **Domingo 30**

Los representantes de distintos grupos indígenas del país realizan una petición pública en la que solicitan se incluya en el primer lugar de la agenda legislativa el proyecto de Ley de Autonomía Indígena. La solicitud se da en el contexto de inicio de sesiones ordinarias, el cual empieza el 1 de setiembre. De la misma forma, los representantes de estas poblaciones señalan que si el proyecto de ley no se aprueba recurrirán a instancias internacionales para hacer cumplir la aprobación del proyecto.

### **Glosario de siglas**

CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social.
CGT	Confederación General de los Trabajadores.
CONAI	Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.
FODESAF	Fondo de Asignaciones Familiares.
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad.
ICT	Instituto Costarricense de Turismo.
INAMU	Instituto Nacional de las Mujeres
INCOFER	Instituto Costarricense de Ferrocarriles.

JAPDEVA	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.
MEP	Ministerio de Educación Pública.
MINAET	Ministerio de Ambiente, Tecnología y Telecomunicaciones.
MSJ	Municipalidad de San José.
ML	Partido Movimiento Libertario.
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
PAC	Partido Acción Ciudadana.
PLN	Partido Liberación Nacional.
PUSC	Partido Unidad Social Cristiana.
SEC	Sindicato de Educadores Costarricenses.
SINDEU	Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica.
SINTRAJAP	Sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.
UCCAEP	Unión Costarricense de Cámaras, Asociaciones y Empresas Privadas.
UPIAV	Unión de Productores Agropecuarios Independientes de Pérez Zeledón

**Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).  
Relevamiento y sistematización a cargo de Alejandro Alvarado Alcázar, Anthony García Marín y Sindy Mora Solano.  
Fuentes: Diarios La Nación, Diario Extra, Semanario Universidad e Informa-Tico.com.**